

EL PACTO
MUNDIAL

El papel del sector privado en la prevención del conflicto y la construcción de paz en Colombia: lecciones y desafíos

Memorias



NACIONES UNIDAS



Diálogo de Política, Pacto Mundial de Naciones Unidas

**El papel del sector privado en la prevención del conflicto
y la construcción de paz en Colombia: lecciones y
desafíos**

Bogotá, mayo 27-28, 2004

Reporte preparado para el Pacto Mundial por Alexandra Guáqueta, D. Phil.,
Directora Académica, Fundación Ideas para la Paz

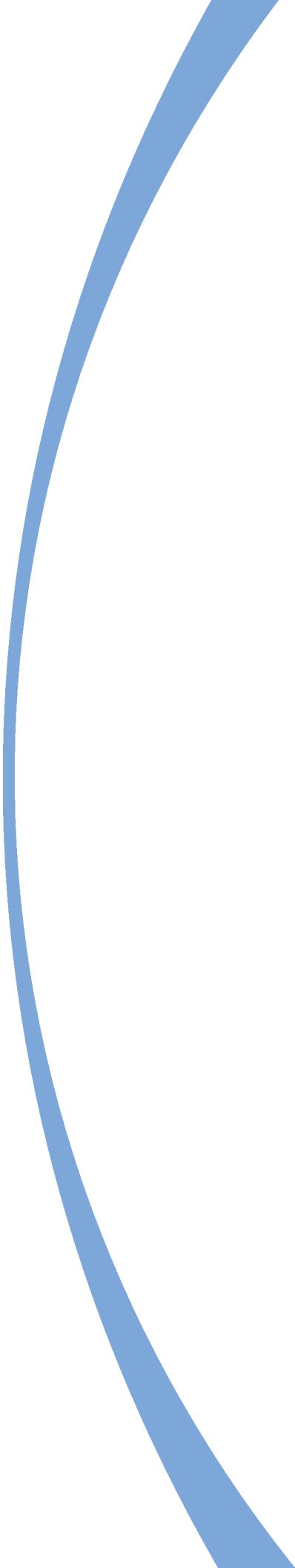


Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo	5
Introducción	8
I. Las vías de la superación del conflicto armado colombiano y la construcción de paz	10
II. Oportunidades para el compromiso del sector privado con la superación del conflicto armado colombiano	11
III. El balance entre mayor participación del sector privado y la necesidad de promover la legitimidad del Estado	14
IV. Factores de éxito en las alianzas entre el sector público y privado	15
V. El bienestar de la población civil como factor de seguridad	18
VI. Avances en el tema de transparencia	20
VII. Opciones de construcción de paz para las instituciones financieras: más allá de la lucha contra el lavado de dinero	21
VIII. Lecciones de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos del sector petrolero internacional	23
IX. Retos para la Red Colombiana del Pacto Mundial	26



Resumen Ejecutivo

Este reporte recoge los hallazgos más relevantes de la conferencia del Pacto Mundial de Naciones Unidas, auspiciada por el Gobierno de Canadá, “El papel del sector privado en la prevención del conflicto y la construcción de paz en Colombia: lecciones y desafíos”, que tuvo lugar en Bogotá los días 27 y 28 de mayo de 2004. El evento reunió a empresarios nacionales y extranjeros, expertos, miembros de organizaciones no gubernamentales locales y transnacionales, representantes de importantes sindicatos, funcionarios del Estado y de Naciones Unidas en un foro neutral para analizar las oportunidades y desafíos de empresas nacionales y extranjeras en la superación del conflicto armado y la construcción de paz duradera en Colombia, y sirvió para lanzar la nueva Red Colombiana del Pacto Mundial.

Las presentaciones y los intercambios en los grupos de trabajo revelaron que muchas compañías nacionales e internacionales que operan en Colombia poseen una importante experiencia en materia de responsabilidad social. También fue evidente la voluntad de las empresas de alinear sus operaciones diarias con la necesidad de desestimular el conflicto, por ejemplo evitando posibles daños colaterales a las comunidades locales al igual que pagos de extorsión a los grupos armados ilegales, invirtiendo en ingeniosos programas sociales y proyectos productivos para generar empleo a nivel local, y fortaleciendo la capacidad de gestión y legitimidad de los gobiernos nacional y local.

Este comportamiento constructivo de muchas compañías tanto nacionales como multinacionales puede ser explicado, al menos en parte, gracias al cambio en sus percepciones sobre los costos de seguridad, a una mayor preocupación por su imagen y reputación, a la presencia de personal colombiano en compañías multinacionales que está muy interesado en marcar una diferencia en su propio país, y por último a un creciente consenso nacional alrededor de la necesidad de frenar a los grupos armados ilegales. Además, el hecho de que Colombia ofrezca, a pesar del conflicto y de la imposibilidad de hacer efectiva su soberanía interna, un grado importante de estabilidad legal, institucional y macroeconómica dentro un marco democrático, también ha coadyuvado

a que las empresas puedan desempeñarse más fácilmente de acuerdo con los estándares actuales de la responsabilidad social.

Es así como muchos empresarios, de acuerdo con las experiencias compartidas en la conferencia, han logrado operar respetando normas laborales y medio ambientales, establecer programas conjuntos con el sector público y acudir a la fuerza pública para su legítima protección. Finalmente, la creciente preocupación y el compromiso de las grandes compañías nacionales también están relacionados con su expectativa de competir en los mercados regionales y globales regidos conforme a estrictos estándares en materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente. El reciente inicio de las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en mayo el 2004, el acuerdo de mayor envergadura para el país en los últimos tiempos, ha resaltado claramente la importancia de estos temas y la urgencia entre el empresariado de abordar todas las aristas de la responsabilidad social y económica del sector privado colombiano.

Tanto expertos como asistentes concluyeron en su mayoría que aún quedan grandes desafíos para las empresas en Colombia. Se mencionó que algunas empresas expuestas a la violencia, la extorsión y el secuestro por parte de grupos armados ilegales y a criminales involucrados en robos, tráfico de drogas y lavado de dinero no han tenido la oportunidad de desarrollar valores y estrategias de transparencia y responsabilidad social de largo plazo, y han tenido que resolver sus problemas de seguridad y económicos de corto plazo a través del apoyo a guerrillas o paramilitares. En general, tanto las multinacionales, como las grandes empresas nacionales con mayor experiencia en filantropía y gestión social, así como la pequeña y mediana industria local todavía pueden hacer más para evitar la agudización del conflicto armado; promover la gestión efectiva de los gobiernos, especialmente a nivel departamental y municipal; crear nuevas oportunidades de empleo en áreas estratégicas rurales y urbanas; prevenir el reclutamiento de jóvenes combatientes ilegales y reincorporar exitosamente en la sociedad a guerrilleros y paramilitares desmovilizados y a la frágil población desplazada. Para ello, será necesario que empresarios, expertos, ONG, organismos internacionales y gobiernos cooperantes promuevan e incentiven la adopción por parte del sector privado en Colombia herramientas útiles y concretas en materia de seguridad y derechos humanos, como las evaluaciones de riesgo político y seguridad e impacto del conflicto y de

códigos de conducta de ética y seguridad en la relación con la fuerza pública; la adopción de pactos de no pago a extorsión y secuestro; la creación de nuevas empresas económicamente viables a través de la difusión de conocimiento especializado y alianzas estratégicas entre empresa y sector público y la transferencia técnica del sector privado al sector público especialmente en materia de gestión.

No cabe duda, que estos esfuerzos serán indispensables para acabar con el conflicto armado, especialmente teniendo en cuenta los claros vínculos entre desarrollo y seguridad, pobreza y conflicto. Pero no serán suficientes para alcanzar la paz y el desarrollo económico sostenibles. Se puede afirmar que en Colombia, a diferencia de muchos otros países en África y Asia que han sufrido conflictos armados, el reto más complejo es enfrentar el flagelo del narcotráfico generalizado, su conexión con las finanzas de la guerrillas y los paramilitares y la permanente erosión de las instituciones democráticas causada por la corrupción relacionada con las drogas. Muy probablemente, la reducción de los efectos negativos de la industria global de las drogas ilegales es una tarea que va más allá de la gestión de los bancos y compañías nacionales y extranjeras en materia de transparencia, generación de empleo e inversión social. Por consiguiente, será necesario el esfuerzo mancomunado de estados y organismos multilaterales alrededor del mundo en materia diplomática, judicial, policial y sobre todo económica y comercial —ya que las condiciones del mercado internacional impondrán restricciones sobre las opciones con las que cuenta Colombia para promover su crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de seguridad.

El papel del sector privado en la prevención del conflicto y la construcción de paz en Colombia: lecciones y desafíos

**Reporte preparado por Alexandra Guáqueta, D. Phil.,
Directora Académica, Fundación Ideas para la Paz**

Introducción

Cada vez hay mayores expectativas locales e internacionales sobre la responsabilidad social y económica de las empresas privadas. Dicha responsabilidad cubre una amplia gama de temas, desde la erradicación del trabajo infantil, la igualdad de oportunidades laborales y remuneración entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente, la transparencia contable y el buen gobierno interno, el derecho a crear sindicatos, la abolición de sobornos y bonos ocultos a funcionarios públicos, hasta la promoción de programas de inversión social en comunidades locales, los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y la democracia política y económica. Además, especial atención se ha prestado al papel del sector privado en países con conflictos armados, ya que en el presente son los conflictos internos, en lugar de las grandes guerras entre países, los mayores focos de violencia en el sistema moderno de estados, al igual que un obstáculo para el desarrollo sostenible en el contexto de la globalización.

Como afirma el Secretario General de Naciones Unidas, Koffi Anan, para bien o para mal, las empresas privadas, incluyendo a los bancos e instituciones financieras, nunca han jugado un papel neutral en las sociedades, y mucho menos en países afectados por conflictos violentos cuyas estructuras políticas, administrativas, legales y económicas son tan vulnerables. Como lo ilustraron expertos en el tema durante la conferencia, muchas de las decisiones que las compañías toman, por ejemplo en

relación con la ubicación de sus inversiones, la mano de obra que contratan y la seguridad social de los empleados, las líneas de abastecimiento, distribución y venta, hasta la seguridad física de sus instalaciones, tienen un impacto en las poblaciones locales. Adicionalmente, la posibilidad de implementar reformas económicas, en materia tributaria, laboral y tenencia de la tierra, factores usualmente conectados con los conflictos y las posibilidades de paz, dependen de su colaboración. Por ello, en el contexto de una guerra, las prácticas y actitudes del empresariado pueden ser decisivas.

La iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, oportunamente lanzada por el Secretario General Kofi Anan en 1999, tiene como fin “promover la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita la conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial con los valores y demandas de la sociedad civil, así como con los proyectos de la ONU, organizaciones internacionales sectoriales, sindicatos y ONG”¹. Actualmente más de 1500 empresas de 70 países, las organizaciones sindicales más grandes del mundo y 50 líderes de organizaciones no gubernamentales con alcance transnacional se han adherido al pacto. Y no en vano, el primer tema abordado por el Pacto Mundial fue el de las opciones del sector privado en la prevención de conflicto y la construcción de paz. En especial, el Pacto Mundial ha buscado generar un mayor conocimiento colectivo sobre los riesgos legales y de seguridad que enfrentan las empresas cuando operan en contextos violentos e inestables; la forma como éstas pueden contribuir, directa o indirectamente, al origen, duración y agudización de conflictos armados; las herramientas concretas que dichas empresas pueden adoptar para contribuir a la prevención de conflictos y su transformación en entornos pacíficos sostenibles con condiciones económicas favorables para la población y los incentivos que los gobiernos, organismos multilaterales y la comunidad internacional en general pueden ofrecer a las empresas para su involucramiento positivo.

Como parte de este trabajo, el Pacto Mundial ha estado realizando una serie de diálogos internacionales para diseminar sus diez principios en materia ambiental, laboral, derechos humanos y transparencia al igual que las herramientas desarrolladas hasta el momento en el tema de sector privado y conflicto. Los primeros dos diálogos se llevaron a cabo en África Sub-sahariana en noviembre de 2002 y en Asia Central en noviembre de 2003.

Con el auspicio del Gobierno de Canadá, se efectuó la tercera ronda de diálogos en Bogotá los días 27 y 28 de mayo a través de la conferencia titulada “El papel del sector privado en la prevención del conflicto y la construcción de paz en Colombia: lecciones y desafíos”. El evento reunió a empresarios nacionales y extranjeros, expertos, miembros de organizaciones no gubernamentales locales y transnacionales, representantes de importantes sindicatos, funcionarios del Estado y de Naciones Unidas en un foro neutral para analizar el papel de las empresas nacionales y extranjeras en la prevención y transformación del conflicto armado y en la construcción de paz en Colombia, y sirvió para sentar las bases para un eventual lanzamiento de la Red Colombiana del Pacto Mundial. La conferencia, además, ayudó a consolidar la idea de que los aportes de las empresas en materia de prevención del conflicto y la construcción de paz van más allá de concepciones tradicionales de filantropía, y que el diálogo permanente entre empresas, ONG, sindicatos, expertos, agencias de la ONU será necesario para la generación de un clima de confianza que permita la adopción de medidas concretas en la búsqueda de la paz.

El siguiente reporte recoge y sintetiza las discusiones centrales relacionadas con dichas experiencias, registra aquellas áreas prioritarias de acción para empresas, gobiernos y comunidad internacional en Colombia e identifica lecciones para las iniciativas del sector privado en otras partes del mundo.

I. Las vías de la superación del conflicto armado colombiano

No cabe duda que el conflicto armado colombiano ha sufrido transformaciones radicales en las últimas dos décadas, y que el narcotráfico es, de lejos, el factor de inseguridad más grave del país, porque financia los grupos armados ilegales, porque ha cambiado las motivaciones y los cálculos de algunos guerrilleros y paramilitares en lo concerniente a las negociaciones de paz y, más importante aún, porque ha debilitado a las instituciones democráticas del Estado. Por ello, como lo sugiere el Informe Nacional de Desarrollo Humano del 2003, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los actores armados en este conflicto son muchas cosas distintas a la vez. Ningún grupo armado es monolítico. Sus miembros son desde proyecto político, poderes locales, maquinarias militares, hasta criminales rentistas con ansias de lucro

personal. Esto sugiere que es factible que la superación del conflicto en Colombia no pase por una sola negociación política que abarque a todas las guerrillas y paramilitares simultáneamente, y que exista, como parece estar sucediendo actualmente, una superposición de tiempos entre el pre-conflicto, el conflicto y el post-conflicto.

Como se resaltó en la conferencia, todo esto exigirá de Colombia y la comunidad internacional cambiar su mirada convencional del conflicto, y el diseño e implementación eficaces de estrategias integrales para dar soluciones locales, regionales y nacionales, de corto, mediano y largo plazo. Deberá evitarse que el conflicto se extienda a nuevas víctimas; disminuir el número de combatientes ilegales y de personas afectadas; atender a las comunidades desplazadas y resarcir a las víctimas inocentes; castigar las conductas criminales; reducir los efectos dañinos sobre el desarrollo y reactivar el crecimiento económico; poner fin o punto final a las acciones armadas y por último hacer que la paz sea firme y duradera, es decir, que no resurjan actores armados que continúen el conflicto.

II. Oportunidades para el compromiso del sector privado con la superación del conflicto armado colombiano

El empresariado colombiano adquirió mayor conciencia sobre los costos de la violencia y los retos de la superación del conflicto armado en la segunda mitad de los años noventa, cuando hubo un aumento significativo en la capacidad económica, y por lo tanto bélica, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los distintos grupos de las Autodefensas, al mismo tiempo que el crecimiento de la economía nacional se estancaba y el déficit fiscal y la deuda externa se elevaban. El Estado y las instituciones políticas estaban desbordadas por las demandas incesantes de los ciudadanos en materia de seguridad y bienestar. Así, la percepción de una crisis generalizada y el creciente consenso entre los colombianos sobre la necesidad de poner fin a las atrocidades de la guerra, motivaron a empresarios colombianos a participar activamente en el proceso de paz adelantado por la administración del presidente Andrés Pastrana en 1998, con la voluntad de asistir técnicamente al gobierno en las negociaciones y comprometerse a realizar profundas reformas económicas de ser necesario. Posteriormente, tras el fracaso de los diálogos con las FARC en 2001, los empresarios han sostenido su interés y compromiso a través del pago de impuestos extraordinarios al Estado y la

puesta en marcha de creativos programas sociales y productivos con miras a brindar soluciones de paz y desarrollo².

Las presentaciones y los intercambios en los grupos de trabajos durante la conferencia revelaron que en Colombia hay una amplia gama de iniciativas sociales de paz y fortalecimiento institucional en las que el sector privado juega un rol importante, y estas manifestaciones de responsabilidad social corporativa se diferencian de las experiencias anteriores de filantropía en el sentido de que buscan atender dilemas específicos del contexto de guerra. Sin embargo, a pesar de ser conscientes de la necesidad de participar más activamente en las soluciones al conflicto armado, no todas las empresas saben con exactitud qué hacer. Algunos participantes anotaron que parece primar la visión de que las iniciativas de responsabilidad social se circunscriben a la ejecución de programas por fuera de las empresas, a veces omitiendo el análisis sistemático hacia adentro, es decir, el análisis sobre la forma como los negocios y las operaciones como tal pueden afectar negativamente el entorno.

En términos generales los participantes identificaron al menos tres líneas de acción con potencial para inducir transformaciones a nivel local y nacional:

- La primera línea de acción está enmarcada dentro de una lógica de **reducción del daño**. Las empresas pueden introducir ajustes a sus operaciones y transacciones y a sus políticas laborales y de seguridad, asegurándose de que estas actividades no causen daño a los empleados y a las comunidades locales, y verificando que no promuevan el flujo de dinero y bienes hacia la guerrilla, los paramilitares o redes criminales que los rodean. Esto incluye el desarrollo de herramientas de evaluación de riesgos e impacto político y de seguridad relacionados con el conflicto; la adopción e implementación de códigos de conducta en derechos humanos y ética, el desarrollo de políticas de transparencia en lo relacionado con la contabilidad interna, la contratación con otras empresas privadas y con el sector público, incluyendo apoyos privados a la fuerza pública; mayor vigilancia al uso de regalías; pactos de “no pago” por extorsión a combatientes ilegales, y el desestímulo a los seguros en contra del secuestro. Algunos asistentes anotaron, además, que generalmente, las compañías más grandes, dados sus recursos financieros y humanos, y la estandarización de sus procedimientos, están mejor posicionadas para desarrollar herramientas de análisis de riesgo y

procedimientos de cumplimiento más sofisticados, y pueden luchar contra la extorsión más fácilmente debido a que tienen la capacidad de contratar firmas privadas de seguridad y, si es el caso, proveer el apoyo financiero y logístico necesario para que la fuerza pública y los organismos de control, entre ellos policías, militares, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Departamento Administrativo de Seguridad, cumplan con su función.

- A diferencia de la primera línea de acción, que busca evitar vínculos negativos con el conflicto, la segunda aborda las conexiones positivas, y está compuesta por **iniciativas de inversión socio-económica y fortalecimiento de la gestión institucional** que buscan prevenir los agravios sociales que pueden motivar la violencia, brindar alternativas de subsistencia a poblaciones afectadas, ligadas al cultivo ilegal de coca y amapola y a combatientes desmovilizados, fortalecer el tejido social e incrementar las capacidades de gestión de las administraciones públicas a nivel municipal, departamental y nacional. En cuanto a las áreas de inversión, los proyectos usualmente se dirigen a la educación de la niñez o alfabetización procurando introducir temas de convivencia y democracia; la capacitación de jóvenes y adultos en oficios técnicos para incrementar sus perspectivas de empleo; la producción agrícola y cadenas productivas regionales; seguridad alimentaria y salud; créditos blandos para crear cooperativas o pequeñas empresas; construcción de infraestructura y capacitación de funcionarios públicos y dotación de equipos al sector público. Los proyectos pueden fluctuar en su monto, ser a nivel rural o urbano, en las áreas aledañas a las operaciones de la empresa, en los barrios donde habitan los empleados y, en ocasiones, más allá de las zonas de influencia de las empresas, cuando éstas son grandes y operan a nivel nacional. Se llevan a cabo a través de departamentos de relaciones públicas, departamentos de comunidades con especialistas en desarrollo económico o a través de fundaciones semi-independientes. En Colombia, es frecuente que los proyectos se desarrollen en conjunto con instituciones del sector público, bancos locales, instituciones financieras y de desarrollo internacional, contratistas especializados en desarrollo económico y ONG locales e internacionales. Además, las compañías han aprendido que pueden contribuir de una mejor forma a los proyectos si prestan, comparten o enseñan su conocimiento financiero y administrativo para el diseño e implementación de los mismos, o si usan su influencia y prestigio

sobre organismos nacionales e internacionales para atraer mayores montos de inversión. La proliferación de alianzas y de los grandes Programas de Desarrollo y Paz, los cuales se analizarán más adelante en este reporte, son muestra de ello.

- Por último, la tercera línea de acción es **política a nivel macro**. El sector privado, los empresarios a título personal, las empresas y los gremios, tienen capacidad de influencia política y puede promocionar y hacer parte de negociaciones de paz en el ámbito nacional, de movilizaciones contra de la violencia, y en general, injerir sobre las altas esferas nacionales e internacionales que participan en la toma de decisiones relacionadas con las políticas de seguridad y paz.

III. El balance entre mayor participación del sector privado y la necesidad de promover la legitimidad del Estado

A pesar de la polarización ideológica entre izquierda y derecha, y de algunos desacuerdos académicos y políticos sobre los orígenes y la naturaleza del conflicto armado colombiano, muchos observadores, nacionales y extranjeros, están de acuerdo hoy con que la superación de la guerra necesitará de instituciones políticas, administrativas, judiciales y militares más fuertes, es decir más eficaces y con mayor credibilidad, dentro de los parámetros de la democracia. Se necesita que reine el imperio de la ley, que el Estado ejerza autoridad y control sobre el territorio nacional y tenga el monopolio del uso legal de la fuerza como parte de su soberanía legítima. Por ello, varios participantes señalaron que en Colombia, algunas empresas del sector privado han entendido que su nuevo dinamismo en la prevención del conflicto y la construcción de paz no puede reemplazar al Estado, estimular la dependencia del sector público sobre el sector privado, opacar el liderazgo oficial o enfocarse exclusivamente en fortalecer a la sociedad civil y las ONG. Sin embargo, algunos advirtieron que sus compañías enfrentan la necesidad de publicitar sus programas y mostrarle a las comunidades locales y a sus accionistas que realmente ejercen responsabilidad social y que están interesados en la solución de los conflictos, lo que conlleva un dilema entre el fortalecimiento de su credibilidad como buen vecino, por un lado, y el fortalecimiento de la legitimidad del Estado, por el otro. Otras empresas no veían que existiera dilema alguno. De todos modos, para evitar una posible disyuntiva, se mencionó que algunas

compañías han optado por llevar a cabo sus proyectos en conjunto con el gobierno nacional o local dejando que estos tomen el liderazgo público. Otras han decidido acompañar sus proyectos con un trabajo pedagógico constante entre comunidades y sector público sobre el valor de tener instituciones robustas y democráticas.

Algunos asistentes a la conferencia sugirieron que el riesgo de deslegitimar al Estado involuntaria o indirectamente es especialmente alto cuando las empresas apoyan a la fuerza pública en su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Otros no estuvieron de acuerdo. Aquellos que identificaron un posible riesgo sugirieron que las empresas pueden optar por proveer asistencia logística, o solo en especie, evitando involucrarse en las operaciones de las autoridades, o ser identificados como los garantes de seguridad y estabilidad local.

IV. Factores de éxito en las nuevas alianzas entre el sector público y privado

Las alianzas entre el sector privado, ONG, gobiernos e instituciones internacionales para adelantar programas sociales o proyectos productivos que buscan prevenir la expansión del conflicto son relativamente recientes. Dicha cooperación, que también ha se ha vuelto más común en otras partes del mundo, es valiosa por varias razones. La primera es la generación de confianza y la recomposición del tejido social. Los expertos suelen hacer énfasis en la idea de que las alianzas, que constituyen un proceso de diálogo entre empresas y ONG para alcanzar un objetivo común, son en sí mismas un mecanismo positivo de generación de confianza mutua entre dos actores que históricamente, por diferencias políticas o prejuicios, han antagonizado. De ahí que en un ambiente como el de Colombia, donde el conflicto armado ha contribuido a agudizar la polarización ideológica entre izquierda y derecha, los roces entre ONG y sindicatos por un lado, y sector público y privado por otro, las alianzas ofrezcan arenas de coexistencia pacífica y, posiblemente, herramientas de prevención del conflicto. Sería entonces conveniente pensar en expandir este tipo de procesos para generar mayor comunicación y solidaridad entre sociedad civil, sector privado y Estado. Algunas compañías colombianas y extranjeras, y ONG transnacionales y locales ya han acumulado experiencias valiosas en esta dirección. Sin embargo, muchos asistentes a la conferencia sugirieron que se podía pensar en una participación más activa de los sindicatos en programas sociales y

proyectos productivos adelantados por el sector privado en alianzas, y que quizás esto podría tener un impacto positivo en las relaciones obrero-patronales, incluso, en la seguridad de los miembros sindicales –que tanto se ha visto afectada en el contexto de la guerra irregular.

Los expertos que participaron en la conferencia señalaron que estos acuerdos de cooperación también solucionan problemas prácticos de implementación, incrementando la posibilidad de éxito de los programas sociales y productivos. La experiencia colombiana demuestra que frecuentemente las alianzas entre sector público, privado, ONG y organismos internacionales han surgido, antes que nada, por necesidades concretas de las compañías, los gobiernos locales y las comunidades.

Es común que, en medio del conflicto, las compañías encuentren dificultades logísticas y políticas a la hora de operar fuera de sus instalaciones o realizar programas sociales: algunas veces no conocen suficientemente el perfil de la población local, las dinámicas sociales y políticas entre las comunidades o sus verdaderas necesidades y, por consiguiente, han descubierto que pueden beneficiarse mucho de asociaciones con ONG o habitantes locales para suplir dichas falencias de información. Así mismo, las empresas tienen fortalezas que pueden ayudar a subsanar las debilidades de los otros. Las empresas tienen aquello que las comunidades locales y las autoridades públicas a veces no poseen a la hora de adelantar proyectos específicos de inversión social y desarrollo económico, como son conocimiento técnico, destrezas para formular, desarrollar y administrar negocios, una idea del uso eficiente del tiempo, recursos financieros, redes de proveedores y distribuidores y capacidad de influencia política a nivel local, nacional e internacional. Las alianzas, entonces, están basadas en principios pragmáticos de interés común y complementariedad.

Cabe anotar que Colombia lleva décadas impulsando una gran variedad de programas de desarrollo económico para incrementar el empleo y los ingresos de sus habitantes. Desde mediados de los noventa, por ejemplo, se multiplicaron los programas de desarrollo alternativo para encontrar reemplazos productivos agrícolas a los cultivos ilegales de coca y amapola. La correlación directa entre el aumento de los cultivos ilícitos y el crecimiento de la guerrilla y los paramilitares le dio, además, un carácter urgente y estratégico a estos proyectos. Sin embargo, hasta el momento, el balance de los cultivos alternativos es regular. Muchos proyectos no se diseñaron teniendo en cuenta que las nuevas actividades

económicas, así tuvieran un fin social y estratégico, debían obedecer a las realidades del mercado nacional e internacional, es decir, debían ser competitivos y operar con lógicas similares a cualquier iniciativa empresarial. Una lección aprendida fue entonces la necesidad de involucrar, en este y otro tipo de proyectos productivos de carácter social, conocimiento y destrezas empresariales para lograr que fueran económicamente viables y sostenibles, es decir que fueran realmente exitosos como negocio. Hoy en día esta idea tiende a permear la nueva generación de programas, en los que empresas, gobierno, entidades financieras y ONG se han vuelto cada vez más creativos y eficientes, con resultados concretos en materia de empleo.

El éxito de las alianzas, sin embargo, puede referirse a más de un factor, no sólo su éxito a la generación de negocios viables. Los llamados “laboratorios de paz”, que se iniciaron en Colombia en 1995 con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, han hecho evidente que las tareas de prevención del conflicto, su transformación y el manejo del post-conflicto requiere no solo la generación de recursos económicos, sino la construcción de instituciones eficaces y de tejido social a partir de la internalización de valores democráticos y de convivencia pacífica³. Ninguno de los componentes, el económico, el institucional y el cambio de valores, por si solos, son suficientes. Una investigación más sistemática sobre la forma como se articulan estos grandes proyectos con múltiples propósitos, y qué factores son indispensables para lograr la paz sostenible a nivel local y, eventualmente nacional, será útil.

Los expertos también argumentaron que el éxito de las alianzas también depende de la adecuada coordinación entre las partes. Algunas experiencias señalan que los mejores resultados se logran cuando las partes acuerdan comités formales de coordinación donde las relaciones no son jerárquicas, donde la información sobre todos los aspectos de los proyectos fluye libremente y donde los objetivos al largo y al corto plazo son concretos y claramente definidos. Adicionalmente, ayuda que exista una distribución equitativa de las ganancias y la copropiedad en la tenencia de la tierra si es el caso, evitando que las comunidades locales restrinjan su papel a la simple provisión de mano de obra. Por parte del sector privado, el involucramiento activo de directivos de alto nivel y expertos técnicos en el diseño e implementación de los proyectos facilitan el rol de las empresas.

Por último, cabe señalar que en Colombia, los llamados laboratorios de paz y otros programas de desarrollo económico y paz enmarcados dentro de este tipo de alianzas, pueden convertirse en instrumentos muy útiles de desmovilización y rehabilitación de combatientes ilegales, debido a que proveen soluciones concretas para su supervivencia y espacios de interlocución con un referente comunitario bajo proyectos estructurados de convivencia y paz.

V. El bienestar de la población civil como factor de seguridad

Los resultados preliminares de un estudio sobre los estándares de responsabilidad social de multinacionales en Colombia que se dio a conocer en la conferencia, mostraron que existe a nivel internacional una tendencia entre las compañías privadas a considerar a las comunidades locales, que incluyen vecinos circundantes, sindicatos, organizaciones sociales, ONG y hasta políticos locales, como “factores de riesgo”. De acuerdo con las discusiones que se llevaron durante el evento, parece ser que lo mismo ocurría en Colombia. En Colombia esta dinámica fue inducida, en parte, por los mutuos prejuicios y por la estrategia de los grupos armados ilegales de infiltrar organizaciones sociales, escuelas, sindicatos, oficinas públicas y hasta las fuerzas de seguridad locales para hacer inteligencia y proselitismo. Por ello, sin tener la certeza sobre la afiliación de los distintos miembros de la comunidad vecina, las compañías preferían minimizar su contacto con la población, pensando que así estarían más seguras. Por su parte, las comunidades veían, y muchas aún lo hacen, a las empresas como clubes de privilegiados, rapaces, frecuentemente en contubernio con funcionarios públicos de alto rango igualmente privilegiados, e indulgentes con los excesos de la fuerza pública. Durante mucho tiempo, estas visiones indujeron el aislamiento mutuo. Algunas empresas, entre ellas multinacionales, pensaron que la política del “bajo perfil” frente a las comunidades y los medios los harían invisibles a los grupos armados ilegales. Sin embargo, la evidencia muestra que esta estrategia no logró impedir los ataques, robos y secuestros.

Eventualmente, debido a los altos costos de seguridad causados por la agudización del conflicto, y la necesidad de mantenerse competitivas en los mercados nacionales e internacionales, es decir, operar con costos de seguridad bajos y sin pagar dinero por extorsiones a grupos armados ilegales, algunas empresas cambiaron la forma como tradicionalmente se relacionaban

con las comunidades locales. Bajo estas circunstancias, y así lo revela el estudio, éstas se convirtieron en aliados clave. Tener buenas relaciones con la comunidad se ha convertido en uno de los factores cardinales en lograr un ambiente de trabajo seguro. Las comunidades son vistas como un activo en las estrategias de mitigación de riesgo de las empresas. Se mencionó que algunas empresas en Colombia arguyen que la presencia militar en si misma nunca logrará garantizar la seguridad de una operación a menos que la comunidad esté a favor de la empresa.

Este cambio de estrategia ha tenido un impacto directo en la forma como las empresas se organizan internamente y en el contenido de sus proyectos sociales. Las relaciones externas de las empresas, han dejado de ser simplemente ejercicios de buena imagen y relaciones públicas. Cada vez más los departamentos de relaciones con las comunidad son vistos como indispensables para la supervivencia de los negocios, y las compañías prestan mayor atención a la calidad del personal que trabaja con las comunidades.

En cuanto a los proyectos sociales, las empresas ahora tienden a ser más sensibles a las susceptibilidades de la comunidades, evitan actitudes paternalistas y promueven el liderazgo de las comunidades, bien sea de la sociedad civil o de las autoridades públicas, en la formulación y desarrollo de los programas. Esto no solo genera un ambiente positivo en las relaciones, sino que genera intereses concretos por parte de las comunidades en la protección tanto de los programas sociales de la empresas como de sus empleados e instalaciones. Algunas empresas más grandes, incluso han decidido democratizar la propiedad de la empresa para que una base más amplia de personas a nivel local y nacional se sientan parte de ella y tengan una mayor voluntad de protegerla.

Adicionalmente, las compañías, especialmente en el sector extractivo (petróleo, gas y minas), han sido más cuidadosas en la mitigación de los impactos negativos en términos sociales y ambientales que sus operaciones pueden tener, y han adoptado instrumentos de evaluación de riesgo e impacto del conflicto más comprehensivos, tomando en cuenta los derechos humanos y los efectos indirectos y de largo plazo de sus políticas de seguridad.

VI. Avances en el tema de transparencia

Crecientemente, la comunidad internacional ha venido reconociendo que la corrupción tiene múltiples y nocivos efectos, entre ellos vínculos directos e indirectos tanto con graves distorsiones económicas a nivel micro y macro como con la violencia y los conflictos armados. Esta preocupación ha llevado al constante perfeccionamiento de instrumentos globales y locales de lucha contra la corrupción. Los representantes del Pacto Mundial se refirieron, por ejemplo, al décimo principio sobre transparencia adoptado por el pacto en 2004 después de un amplio proceso de consulta entre aquellos empresarios y sectores sociales que hacen parte de la red mundial. El nuevo principio dice que las empresas deberán trabajar contra todas las manifestaciones de la corrupción, incluyendo la extorsión, y el soborno. El Pacto Mundial también ha venido trabajando sobre el tema de los contratos de asociación en el sector extractivo y la transparencia en la distribución e inversión de regalías⁴.

Se presentaron, además, los últimos avances de la legislación internacional contra la corrupción. Se destacó en particular que, como una innovación en la normatividad internacional, la nueva Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción aborda de manera explícita la responsabilidad del sector privado en casos de extorsión y soborno, y no solo la de los funcionarios públicos. Es decir, se reconoce al sector privado como posible actor del delito. Adicionalmente, se plantea claramente al “encubrimiento” como delito. Así mismo, se le exige al sector privado mejores normas contables y procedimientos de auditoría, y que reconozca y difunda dentro de sus colegas las sanciones civiles, administrativas o penales que pueden ser eficaces para luchar contra la corrupción.

Otros participantes se refirieron a la existencia de la corrupción legal en Colombia, su impacto sobre la economía del país y la necesidad de encontrar consensos políticos para abolirla. La corrupción legal se presenta cuando grupos privados, por vía estrictamente legal, entre ellos aportes a campañas electorales, logran influir de manera desproporcionada en el Congreso o el Ejecutivo para que las legislación en materia tributaria los favorezcan. Estas dinámicas generan distorsiones con graves impactos sobre la distribución de la riqueza, lo que a su vez influye sobre los conflictos sociales del país y la generación de violencia.

VII. Opciones de construcción de paz para las instituciones financieras: más allá de la lucha contra el lavado de dinero

Otro estudio de expertos en el tema del sector financiero y conflictos armados, presentado durante la conferencia, identificó que en la práctica, las instituciones financieras pueden estar vinculadas indirectamente al surgimiento o duración de los conflictos armados de muchas formas: a través del financiamiento de controversiales megaproyectos, como la construcción de represas o minas; por medio de transferencias financieras que apoyan actividades ilegales como la compra de armamento o que lavan el dinero de los grupos armados ilegales; o cuando sirven de conducto a fugas de dinero masivas durante grandes crisis macro-económicas en países altamente vulnerables, lo que a su vez puede contribuir a desencadenar espirales de inestabilidad social y eventualmente el origen de conflictos violentos⁵.

El sector financiero colombiano no está exento de estas dinámicas, especialmente teniendo en cuenta que el narcotráfico, y por consiguiente, el lavado de dinero, hacen parte fundamental de la economía de guerra del país. Tanto las FARC como los distintos grupos paramilitares, financian sus maquinarias políticas y bélicas de guerra en una porción considerable a través del cultivo, procesamiento y tráfico doméstico e internacional de coca.

Algunos participantes anotaron que antes de que el tema de la financiación de los grupos armados hubiera adquirido el auge político, legal y estratégico que tiene hoy, los bancos en Colombia ya habían adoptado medidas estándares de control de lavado de dinero debido al crecimiento, desde los años setenta, de la industria ilegal de drogas y de redes mafiosas en el país y a la presión internacional, en particular proveniente de Estados Unidos como parte de su lucha mundial contra las drogas. Y que por eso están ahora mejor posicionados para ajustarse a las necesidades de la superación del conflicto. Actualmente, no cabe duda que los bancos han logrado reducir las oportunidades de lavado de dinero tanto de narcotraficantes como de los grupos armados ilegales. Sin embargo, todos éstos tienden a encontrar nuevas formas de realizar sus transacciones bien sea a través del sistema financiero en Colombia, o por fuera de él; por ejemplo, los grupos armados han canjeando drogas directamente por armas en los mercados ilícitos, mantienen grandes sumas en dinero efectivo, constituyen empresas legales o invierten en fondos por fuera del territorio nacional. Por eso, se sugirió en la conferencia

que puede resultar conveniente replicar en otras entidades como las aseguradoras, las cámaras de comercio y las superintendencias, algunas de las mismas medidas de transparencia y control adoptadas por los bancos. En todo caso, los esfuerzos de Colombia no serán suficientes, dado el carácter transnacional del lavado de dinero, la comunidad internacional, en especial los paraísos fiscales, deberán hacer un mayor esfuerzo por cerrarle el paso a las transacciones de actores ilegales.

Además de las medidas destinadas a evitar que los combatientes ilegales abusen del sistema financiero, los bancos y entidades financieras tienen otras oportunidades para la superación del conflicto armado y la construcción de paz, ofreciendo productos y servicios concretos que le permitan a las comunidades más frágiles, entre ellas desplazados y desmovilizados, generar condiciones económicas adecuadas para su subsistencia y eventual blindaje de la influencia de los grupos armados. Por ejemplo, se mencionó en la conferencia que los bancos pueden desarrollar líneas especiales de micro-créditos y asistencia técnica acordes con los perfiles específicos de estas poblaciones, y que además, pueden reducir sus riesgos financieros, muchas veces ocasionados por el frecuente fracaso económico de los proyectos, trabajando con asociaciones locales y ONG especializadas para proveer asistencia técnica a los clientes en las etapas de planificación y desarrollo de los proyectos. Esto implica un acompañamiento que inicia antes de que el préstamo es desembolsado y por la duración del mismo. En general, así como las empresas han logrado disminuir sus problemas de seguridad a través de un mayor acercamiento a las comunidades locales, los bancos también pueden reducir sus riesgos si aprenden a conocer mejor las personas a las cuales prestan sus servicios, al igual que su entorno político y económico.

Tanto la legislación nacional y como internacional, sin embargo, pueden desestimular una línea de servicios como los micro-créditos a poblaciones vulnerables y con orientación social, porque buscan evitar que los bancos se expongan a deudores con baja capacidad para responder por los préstamos. Por lo tanto, para que este esquema realmente funcione son indispensables garantías especiales por parte del Estado y de las instituciones financieras multilaterales.

Algunos asistentes a la conferencia advirtieron que mientras que en el tema de los micro-créditos, un mayor grado de flexibilidad en las reglas bancarias tradicionales es importante para atender las comunidades

de alto riesgo, también es cierto que en la práctica un amplio rango de organizaciones sin ánimo de lucro y no reguladas actúan en Colombia como intermediarias entre los bancos y las poblaciones en zonas con dificultades de orden público y, algunas veces, dado que no existen regulaciones y vigilancia suficientes, dichas organizaciones son manipuladas por los grupos armados. En este caso se necesitan mejores controles, especialmente para no menoscabar la excelente labor de algunas organizaciones.

Estas oportunidades que tienen los distintos tipos de instituciones financieras de ayudar a que el conflicto armado no se extienda y de manejar los retos del post-conflicto se refieren a las necesidades que tienen los individuos de planear su futuro y contar con flujos estables de recursos. Pues bien, los estados tienen necesidades similares, que si no se satisfacen, se pueden generar graves distorsiones macroeconómicas que llevan a la inestabilidad social, y eventualmente a la inestabilidad política y la violencia. Uno de los fenómenos frecuentes es el daño causado por la fluctuación en los precios internacionales de bienes primarios, como el petróleo o el café. En Rwanda, por ejemplo, el comienzo de la guerra civil coincide con la caída sustancial de precios del café después de la desintegración del Acuerdo Internacional del Café en 1989. Aquí no se sugiere que la caída de precios causó el enfrentamiento armado pero, indiscutiblemente, la disminución abrupta de ingresos tanto para el Estado como para la sociedad exacerbó los problemas sociales y redujo la capacidad de respuesta del gobierno. Cuando la economía de un país depende de la exportación de bienes primarios, está expuesta a que la variación de precios tenga efectos negativos a nivel macroeconómico y en sectores rurales particularmente vulnerables, de ahí que los bancos pueden jugar un papel positivo ayudando a los estados a manejar los ingresos provenientes de los recursos naturales a través de fondos de estabilización⁶.

VIII. Lecciones de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos del sector petrolero internacional

Mucho se ha debatido si la mejor forma de lograr que empresas multinacionales y nacionales alrededor del mundo presten mayor atención a la prevención de conflictos armados y la construcción de paz, y en términos más generales, al desarrollo sostenible, la protección del medio

ambiente y los derechos humanos y laborales, es a través de castigos o incentivos, de regulaciones estrictas o códigos de conducta adoptados y monitoreados voluntariamente por las empresas. Los escépticos argumentan que las empresas no suelen imponerse restricciones a sí mismas y que por eso, la figura de los códigos voluntarios es ineficaz. Los optimistas arguyen que, por el contrario, las medidas voluntarias dan mejores resultados, porque imponen menores costos a las empresas y por lo tanto no generan desincentivos a la inversión, y que de todos modos los estados tienen poca capacidad para saber realmente qué pasa al interior de las empresas y hacer efectivas las regulaciones. Muy probablemente, tendrá que haber una combinación de incentivos, y en todo caso, es el sector privado el que tiene la capacidad de mostrar qué vía es mejor.

La implementación de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, un código de conducta voluntario firmado por gobiernos, ONG y multinacionales petroleras a partir del 2000, parece indicar que las iniciativas voluntarias son posibles⁷. Eso sí, hay que reconocer que a nivel global, la industria ha estado especialmente sujeta a críticas y demandas legales por presuntos daños causados al medio ambiente, vínculos indirectos con violaciones a derechos humanos por parte de militares o policías que reciben su apoyo o pagos extraoficiales a funcionarios corruptos. En parte, estas presiones y cuestionamientos a su reputación han motivado a las empresas del sector a encontrar, por sí mismas, soluciones concretas a las expectativas transnacionales en materia de responsabilidad social corporativa mediante la adopción de códigos de conducta, como el de Seguridad y Derechos Humanos. Los principios brindan guías concretas a las empresas en tres áreas, la evaluación de riesgos políticos y de seguridad e impacto del conflicto armado, que ya se ha mencionado en el reporte, la contratación de empresas de seguridad privada y la relación con la fuerza pública. Además tiene un fuerte componente pedagógico en materia de derechos humanos tanto al interior de las empresas, como en sus relaciones con contratistas y con la comunidad que las rodea.

La implementación de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos en Colombia está bien avanzada, comparada con los procesos en otros países como Nigeria e Indonesia, y el caso ofrece lecciones prácticas no solo para otras empresas del sector en Colombia, sino para otros sectores económicos que enfrentan complejos retos de

seguridad al operar en países con conflictos armados y que están sujetas a cada vez mayores exigencias de responsabilidad social formales e informales a nivel local e internacional.

Los avances en Colombia han sido posibles gracias al compromiso de los directivos de las empresas y del interés particular de algunos empleados⁸, que se han encargado de impulsar los principios; lo que demuestra que este tipo de herramientas requieren de compromisos a varios niveles simultáneamente. También ha sido clave la existencia de una estructura institucional democrática relativamente estable, a pesar del conflicto. También debe destacarse el rol de la Asociación Colombiana de Petróleos, que ha facilitado el intercambio de mejores prácticas y difundido el tema a otras empresas internacionales y locales. Hacia el futuro, la asociación tiene un gran potencial de servir como interlocutor entre las compañías y el gobierno colombiano en asuntos relacionados el desempeño en derechos humanos de la fuerza pública, y las compañías y las ONG locales.

La experiencia en Colombia muestra, además, que tanto la evaluación de riesgos y de impacto del conflicto, como de la implementación de medidas de seguridad integrales que tienen en cuenta las necesidades de las comunidades locales y los problemas de derechos humanos, son más exitosas cuando los altos directivos de las empresas participan directamente en dichos procesos, y cuando existe una gerencia común para los departamentos de seguridad y asuntos con la comunidad.

En cuanto a las relaciones con la fuerzas pública, militares y policía, las empresas han aprendido que pueden evitar verse vinculadas con casos de corrupción o violaciones de derechos humanos si reducen los apoyos directos a los comandantes de los batallones locales, si no proveen asistencia letal, como armas, y si prestan asistencia en especie en lugar de dinero. Por su parte, en Colombia la relación con empresas de seguridad privada ha sido, en general, menos problemática que en otros países donde la prestación de dichos servicios no está regulada. En Colombia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada registra y vigila las empresas privadas de seguridad nacionales, y establece estándares técnicos y legales acordes con las normas internacionales en la materia.

Finalmente, el entrenamiento en derechos humanos y derechos internacional humanitario que las empresas han ofrecido a sus empleados, y en algunos casos sus contratistas y la fuerza pública que opera en las zonas de influencia de las empresas, se ha convertido en una herramienta

poderosa para inculcar valores democráticos e inducir profundas transformaciones culturales. De ahí la importancia, especialmente en ambientes políticos polarizados, que las empresas sepan escoger bien a los facilitadores de dicho entrenamiento. El lenguaje y la metodología, además, deben tener en cuenta que no todos los empleados están familiarizados con el análisis y entendimiento de conceptos sociales complejos; y el empleo de personal militar retirado puede demandar esfuerzos adicionales.

Aunque los Principios Voluntarios no hacen referencia explícita al tema de las regalías del sector extractivo, vale la pena abordarlo brevemente. En Colombia, a diferencia de otros países, existen consensos relativos y leyes establecidas para el manejo de las regalías, aspectos fundamentales cuya ausencia en otros países han originado o exacerbado conflictos sociales y guerras. En Colombia, no obstante, las regalías han estado directamente relacionados con las finanzas de los grupos armados ilegales, la erosión de los gobiernos locales a través de la corrupción y la infiltración de las instituciones y los organismos de control por parte de grupos armados ilegales y la extorsión y manipulación de contratistas locales. Por ello, las empresas petroleras han venido tomando mayor conciencia de la necesidad de promover con fuerza el uso transparente y apropiado de las regalías. Para muchos, esto implica un fuerte cambio en la forma tradicional como se abordaba el tema, pues anteriormente, las empresas buscaban mantenerse lo más distantes posible de la inversión de las regalías por considerarla un asunto de interés exclusivo del sector público.

El potencial para replicar este ejercicio para otras industrias colombianas y extranjeras es claro. Los Principios Voluntarios herramientas prácticas para abordar los problemas de seguridad y reputación de las empresas, han ganado legitimidad global y brindan una plataforma para la interlocución constructiva entre empresas, ONG y sindicatos.

IX. Retos para la Red Colombiana del Pacto Mundial


El Pacto Mundial ha impulsado la formación de redes locales, de las cuales hay más de 50 en distintos países del mundo. Estas redes involucran tanto a empresarios como a distintos actores gubernamentales y sectores sociales y tienen la misión de fomentar diálogos locales sobre los principios y herramientas del Pacto Mundial y los objetivos más generales

de Naciones Unidas frente a los retos de la globalización. La conferencia sirvió para sentar las bases de una Red Colombiana del Pacto Mundial y como resultado de los debates se pueden enunciar los siguientes retos para la Red Colombiana del Pacto Mundial.

- Cada vez más, las grandes empresas nacionales e internacionales que operan en Colombia están concientes de que pueden jugar un papel mucho más activo en la superación del conflicto armado, y muchas han venido financiando programas de responsabilidad social corporativa acordes con la necesidad de prevenir la expansión del conflicto armado, transformar las condiciones de violencia local en coexistencia pacífica, fortalecer la capacidad de gestión y legitimidad del Estado y atender a la población desmovilizada y desplazada. Sin embargo, es necesario estudiar las iniciativas sistemáticamente para establecer su nivel de éxito e introducir ajustes si es necesario. La desmovilización y reincorporación, además, requiere de mayor atención en el corto y mediano plazo, y aunque existe la voluntad por parte del sector privado de ayudar en este tema, las alternativas concretas no son claras.
- Aún hace falta concientizar sobre las premisas del Global Compact a las micro, medianas y pequeñas empresas nacionales ubicadas fuera de las ciudades y donde el conflicto y la pobreza son más agudos. En particular, dichas empresas deben conocer las formas directas e indirectas mediante las cuales pueden ayudar a superar o exacerbar el conflicto. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este grupo de compañías tienen menores incentivos para preocuparse por estándares internacionales y por problemas de reputación, y son más vulnerables a la extorsión de los combatientes ilegales o su manipulación.
- Las campañas de pedagogía deben ser diseñadas de forma tal que múltiples lenguajes, racionalidades y culturas sean tenidas en cuenta al mismo tiempo, lo que requiere de facilitadores que puedan viajar fácilmente a través de la división entre lo local y lo global y entender el funcionamiento del sector privado por adentro, al igual que del contexto político y económico local.
- Dadas las condiciones actuales de polarización política e ideológica, vale la pena fomentar mayores alianzas especialmente entre empresarios, ONG y sindicatos, creando así consensos mínimos sobre aspectos fundamentales de derechos humanos y espacios de debate pacífico.

- Finalmente, es necesario señalar que la solución del conflicto armado no recae exclusivamente sobre el sector privado, así este sea indispensable tanto para las iniciativas locales de paz y desarrollo como para negociaciones nacionales. El fortalecimiento de la capacidad de gestión del gobierno nacional y de los gobiernos locales, la depuración de la fuerza pública, y una mayor legitimidad del Estado para ejercer autoridad en todo el territorio serán la clave de la superación del conflicto y de la estabilidad y seguridad en el largo plazo. Así mismo, los distintos actores de la comunidad internacional tienen la capacidad de ayudar o entorpecer la superación del conflicto y sus políticas deberán estar calibradas con las realidades de Colombia para otorgarle el margen de maniobra que requiere para alcanzar la paz duradera. El sector privado no puede suplantar al Estado, pero si puede ayudar en la construcción colectiva de una sociedad más transparente, más productiva en lo económico e ideológica y socialmente tolerante.

- 1 Véanse en las páginas del pacto mundial en español e inglés, <http://www.pactomundial.org> y <http://www.unglobalcompact.org>.
- 2 Véase Ricardo Correa, “Empresarios, conflicto armado y procesos de paz en Colombia”, en Luis Alberto Restrepo, coordinador, *Síntesis 2003. Anuario social, político y económico de Colombia* (Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, 2004).
- 3 Actualmente hay al menos 14 programas de esta índole. Son programas de largo plazo, desarrollados en varios municipios a la vez, que usualmente trabajan en seis áreas temáticas, a saber: procesos productivos; manejo ambiental sostenible; fortalecimiento institucional y de organizaciones sociales; vida, justicia y paz; cultura y conocimiento; y educación, salud y vivienda. Dada la envergadura de los programas, éstos usualmente han contacto con múltiples fuentes de financiación, especialmente de origen internacional.
- 4 Ver Juliette Bennette, “Conflict Prevention and Revenue Sharing Regimes”, mayo 2002 y Alexandra Guáqueta, “The Colombian Conflict: Political and Economic Dimensions” en Karen Ballentine y Jake Sherman (editores), *The Political Economy of Armed Conflict. Beyond Greed and Grievance* (Boulder: Lynne Rienner, 2003) p. 83-92.
- 5 El reporte *Investing in Stability* de la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el International Institute for Sustainable Development ofrece un análisis más detallado sobre estos vínculos al igual que recomendaciones sobre como reducir los nexos negativos entre entidades financieras y conflicto, véase http://www.iisd.org/pdf/2003/natres_investing_stability.pdf.
- 6 Vale la pena examinar con más detenimiento la relación entre los distintos servicios prestados por el Fondo Nacional del Café, entre ellos la estabilización de precios, y las dinámicas del conflicto en zonas cafeteras. Colombia también sufrió con la caída de precios después de 1989, que desbordó la capacidad del fondo en la estabilización de precios. Por otro lado, la Federación Nacional de Cafeteros ha sido ejemplar en su creación de bienestar colectivo en la zona, y probablemente dicha gestión redujo por mucho tiempo la agudización del conflicto en algunas zonas del eje cafetero.

- 
- 7 Para una discusión sobre los Principios Voluntarios véase Bennett Freeman y Genoveva Hernández Uriz, “Managing Risk and Building Trust” en Rory Sullivan, editor, *Business and Human Rights: Dilemmas and Solutions* (Greenleaf Publishing, 2003). Sobre el tema del sector petrolero y la construcción de paz véase también International Alert, “What Role for Oil Majors in Supporting Sustainable and Development Peace in Angola?”, disponible en http://www.international-alert.org/pdf/pubbus/role_oil_majors_angola.pdf.
 - 8 Lo que técnicamente se conoce como “emprendedores normativos” son aquellas personas que, por sus convicciones éticas, resuelven promover ciertos temas dentro de grandes organizaciones, así esto no represente compensaciones salariales o profesionales.

Bandera en español







Bandera en inglés

The Global Compact Policy Dialogue on private sector, conflict prevention and peace-building provided a unique opportunity for various international and Colombian social actors to examine options for transforming local violent contexts into peaceful and profitable environments. It was a valuable trust-building exercise that should continue to reduce political and ideological polarization in the country. The meeting also served to raise the awareness of company managers on-the-ground regarding the options and obstacles for private sector engagement in conflict prevention and peace-building activities.

The conference revealed that there is an important degree of corporate social responsibility awareness among national and international companies operating in Colombia, and many are engaged in programmes aiming at generating local employment, empowering civil society and strengthening state capacity. There is, nevertheless, an important recognition that more can and should be done, especially with regard to the promotion of transparency and human rights. Moreover, it was established that it is critical to integrate smaller companies, unions and NGOs into multistakeholder initiatives focused on conflict prevention and peace-building.

The preliminary launch of a Colombian Global Compact network reflects a keen interest on the side of participants of the meeting to move ahead with the implementation of the Compact in Colombia.

Compact Network could be created. The session resulted in a pre-launch of the Colombian network. Participants decided that the steering committee that helped to organize the Global Compact Policy Dialogue would spearhead efforts to create a formal network structure in Colombia and would enlist participation from a wide range of actors - including companies and civil society organizations. Participants also identified a Technical Coordinator who will serve as the Global Compact's focal point to steer the emerging network's secretariat.

Drawing from the Policy Dialogue, participants agreed that the emerging Colombian network should focus on the following:

- Familiarizing and assisting companies with the implementation of the Global Compact's ten principles.
- Bringing willing and capable actors together to promote private sector involvement in conflict prevention and peace-building.
- Further engaging NGOs and unions in multistakeholder initiatives.
- Disseminating the Global Compact Business Guide on Conflict Impact Assessment and Risk Management, which has already been translated into Spanish.

- Raising awareness among small and medium-sized companies outside the large cities in Colombia (where conflict is most acute) regarding conflict-sensitive business practices and options available for companies to engage in conflict prevention and peace-building.
- Facilitating systematic best-practice sharing by companies.

- Promoting the adoption of transparency and ethical business codes. However, the problem of widespread drug trafficking and its connection to illegal combatant finances and the ongoing erosion of democratic institutions caused by drug-related corruption is a difficult challenge for the private sector, governments and civil society alike. Reducing the negative effects of the world-wide illegal drug industry falls beyond the scope of what companies alone - be they international or local - can do.

- The endorsement of local sectoral associations. For example, the Colombian Oil Association has supported best-practice sharing seminars on private security and conflict risk assessment.

Experts at the meeting stressed this code's potential to trigger important changes in company attitudes towards conflict prevention strategies. The process of developing conflict risk and impact assessment tools and undertaking periodic systematic evaluations, as well as the use of innovative and participatory methodologies in human rights training significantly contributes to the internalisation of human rights norms.

To continue the process of refining and strengthening the Voluntary Principles, signatories should pursue the following:

- Emphasize human rights training for employees who are former military or those who served in security agencies.
- Close the gap between risk assessments and practice.
- Extend the code and its spirit to local contractors and promote safer environments for their operations.
- Extend the code to oil companies that operate at the national and regional levels and who are partners of major oil multinationals.
- Establish legally and politically viable mechanisms to gain access to the human rights records of public security forces.
- Establish feasible monitoring mechanisms for company support to public security forces.
- Engage in frequent dialogue processes with international and local representatives of signatory NGOs and their local partners.
- Promote relevant best-practice sharing among companies as well as collective initiatives in host countries.
- Engage in independent auditing.
- Signatories to the Voluntary Principles and other national and international actors should promote the replication of this code for other industries facing similar security and human rights challenges.

2. The Colombian Global Compact network

After the Policy Dialogue, several multinational companies, Colombian business managers, expert policy institutions and members of social organisations held a workshop to discuss how the Colombian Global

the Voluntary Principles on Security and Human Rights, a tri-partite code of conduct drafted and signed jointly by governments, NGOs and companies in 2000. The code recognizes the security needs of multinationals in the extractive industry operating in conflict and politically vulnerable zones worldwide, and provides concrete guidelines on three areas: the way companies should carry out more comprehensive risk assessments that take into account human rights, relations with host country security forces, and relations with private security providers. Experts at the meeting established that the implementation of the Voluntary Principles by multinational oil companies in Colombia seems more advanced than in other countries, despite differences among individual companies. Key factors that can contribute to progress in this area include:

- Greater awareness about reputational costs.
- High-level commitment and interest both at headquarters and in the subsidiaries.
- Employees with a good understanding and knowledge of local and international social and political phenomenon.
- Formal coordination mechanisms among Security, Legal and Community Affairs departments (i.e. having a common manager between departments).
- Incentives and rewards for results achieved in the promotion of transparency and human rights.
- A large presence of local staff with a greater stake in stability and peace in the country.
- An important degree of legal, institutional and macroeconomic stability.
- Availability of skilled labour and good levels of education among local employees.
- The introduction of human rights and international humanitarian clauses in contracts and agreements with public and private security providers.
- Agreements with local security forces to provide non-combat logistical support and assistance in kind in order to avoid fuelling corruption and possible illegal supplies to combatants.

Financial institutions can exert a positive influence over fragile communities or those recovering from conflict, since they provide key products and services that can help entrepreneurs to restart their businesses. Some of the options for banks include:

- Developing special lines of products and services, such as micro-credit schemes, that follow different procedures from standard loans.
- Working with local associations and specialized NGOs to provide customers with technical assistance in the areas of project planning or accounting - both before the loan disbursement and for the duration of the loan. These activities can help to increase the success rate of projects and can also reduce debt risks for banks.
- Using other organizations to collect payments in high-risk zones.
- Forging closer relations with communities in the same way extractive companies have begun to recognize that communities can be valuable assets.

National legislation and international standards, however, may work as strong disincentives for socially-oriented micro-credit schemes used as conflict prevention or post-conflict instruments. Therefore, greater guarantees by the state and multilateral financial institutions are indispensable. However, while regulation flexibility is important in order to allow banks to provide services to high-risk communities, it is also true that a wide range of under-regulated non-profit organizations act as middle-men between banks and local communities in Colombia and they are easily misused by illegal combatants. These and other such grey-area activities need much better controls.

As much as individuals need to be able to plan for their future and rely on stable flows of resources - so do states. Banks can play a positive role by helping states manage natural resource wealth and stabilization funds to solve commodity price fluctuation. Colombia has taken steps in this direction by introducing a system to stabilize coffee prices. The Colombian National Coffee Fund provides an interesting case for further study.

F) Lessons learned from the implementation of the Voluntary Principles on Security and Human Rights

Some multinational companies are well advanced in the process of changing the way they do their core business and adjusting their notion of what corporate social responsibility entails - especially in the context of on-going conflict. One important example is the implementation of

management and should promote the efficient and transparent investment of royalties by local authorities.

E) Local financial institutions supporting local development

Experts at the meeting highlighted the fact that financial institutions can be indirectly linked to the onset or duration of violent conflict through the financing of large contested projects such as dams or mines. They may also be involved in financial transfers supporting illegal activities including money laundering. Macroeconomic shocks in countries that are already unstable can further contribute to social instability and conflict. The UNEP FI – IISD report “Investing in Stability” provides a preliminary analysis of the linkages between the activities of financial institutions and conflict. It offers a number of suggestions regarding how negative effects can be minimized as well as how a financial institution can proactively invest in conflict prevention and peace-building activities in order to secure a more stable environment for its operations.

While the Colombian financial sector has been misused to help sustain the ongoing conflict, there has been a very successful initiative to reduce money laundering driven by Colombian banks. Local participants stressed that the Colombian financial sector adopted standard control measures relatively early due to the sector’s high exposure to the illegal drug industry and to international pressure, especially by the United States as part of its war against drugs. Therefore, banks have probably helped to reduce money laundering by regular drug traffickers, guerrillas and paramilitaries who finance their war machineries through illegal drug cultivation, processing and domestic and international trafficking. However, innovative ways to launder illegal profits or swap drugs directly for weapons in the black market continue to be developed.

The following measures are recommendations made to financial institutions:

- Many of the same control and transparency measures adopted by banks, such as “know your client”, should be implemented by generally speaking, state agencies where industries, retailers and service providers officially register.
- The efforts of Colombian banks should be supported by stronger international initiatives to curtail the remaining avenues for money laundering through international financial centres.

forms, including extortion and bribery". In addition, the UN Convention Against Corruption explicitly addresses the responsibility of private sector actors, not just public officials, in acts of extortion and bribery.

At times certain activities or transactions by private sector actors or public officials may not be explicitly banned by law, but clearly favour the interests of privileged sectors of society and may have profound negative effects for the economy as a whole. Such activities can occur when interest groups try to directly influence the legislative process, including through tax reforms and subsidies; by providing indirect contributions to electoral campaigns; sporadic perks to legislators and public officials; and donations to charity. Participants pointed out that companies could promote long-term collective interests by expanding their approach to transparency. An activity could include forging pacts not to lobby public sector officials for individual gains. Companies are also required to improve their accounting and auditing practices, prevent conflicts of interest and report possible money laundering activities.

Text box 5

The Colombian government's anticorruption programme is promoting transparency measures beyond exercising the freedom of information right. It is setting in place a results-based accountability process on the implementation of the National Development Plan.

Transparency in revenue-sharing and management regimes

For a long time law has regulated revenue-sharing and management regimes in Colombia. Information regarding the earnings of national and local governments as well as multinationals is public knowledge. However, in practice, local communities lack sufficient knowledge about revenue-sharing and management schemes and are unable to hold local authorities accountable on the investment of royalties. Moreover, illegal armed groups have abused well-intentioned revenue-management schemes, which have sought to channel wealth to less-developed local communities. Local authorities have been unable to fend off guerrilla and paramilitary infiltration in local administrations, extortion and threats. Given the direct links between the misuse of royalties and the duration of conflict, multinational and local oil, gas and mining companies should work to make local populations more aware of royalty wealth and

extortion money to illegal armed groups. Under these circumstances, local communities have become key actors for the company. The study also mentioned that some companies have realized that the presence of the military alone will not secure an operation as long as local communities are not supportive. Local communities need safer environments and companies must work to encourage better security conditions for local people in the communities where they have operations.

It was suggested that understanding communities as a key actor has helped to change the way companies engage communities. Community affairs departments are no longer “soft” departments merely exercising public relations activities, but rather are increasingly viewed as key to the survival of the business, and companies are more attentive to the quality of personnel in such departments. Companies, especially in the extractive sector, have tried to mitigate the negative impacts their presence may have on communities and have adopted more comprehensive conflict impact and risk assessment tools. A company can engage with communities in a mutually beneficial way by avoiding donations and paternalistic attitudes and by promoting greater local ownership in the formulation and development of social programmes. This trend serves to question the efficacy of the “low profile” approach that many companies, especially multinationals, have endorsed in Colombia.

Text box 4
One major electrical company in Colombia suffering ongoing guerrilla attacks chose to go public, putting shares on the stock market as a strategy to gain multiple shareholders with direct stakes in the company's security and profitability.

D) Transparency and anti-corruption measures

The international community has increasingly recognized the multidimensional effects of corruption and its links to economic distortions and violence, and there are now new instruments that can contribute to the fight against corruption at the national and international levels. In early 2004 the Global Compact held an inclusive consultation process that added a 10th and last principle on anti-corruption to the existing list of nine principles on labour, the environment and human rights. The new principle states “businesses should work against corruption in all its

Text box 2

One special type of partnership highlighted was the so called “peace laboratories”. These are ambitious large-scale multi-purpose projects usually backed by international bilateral or multilateral donors. They work on six main themes: economic and production systems; environmental protection; strengthening of institutions and civil society groups; justice and peace; culture; and education, health and housing. The purpose is to contain guerrilla and paramilitary influence from one or more municipalities and create adequate conditions for long-term sustainable peace. They have the potential to become useful demobilization and rehabilitation instruments. The first peace and development programme was launched in the Magdalena Medio in 1995, sponsored by the European Union. There are now at least 14 such programmes across the country that have become models for donor agencies engaged in institution-building.

Text box 3

Some of the large private sector-owned foundations are already working beyond traditional philanthropic undertakings and are using a multistakeholder approach for conflict prevention and peace-building. One large foundation brought key sugar producers and the US Agency for International Development to carry out restorative justice projects in Valle del Cauca.

C) Constructive relations with local communities

One expert study mentioned that some private companies often consider local communities, meaning neighbouring surroundings, unions, grass-roots associations, NGOs and even local politicians, a risk factor. This has been the case in Colombia, where distrust was possibly induced by the tendency of illegal armed groups to attempt to infiltrate (with some success) social organizations, schools, unions, public offices and even local security forces, so companies could not recognize who was who and tended to minimize their engagement with the community. On the other hand, some communities viewed companies as excessively rich, greedy and rapacious, and too close to corrupt public officials lenient with abusive security forces. However, some companies realized that isolation had its limits - especially if they had to remain competitive in the market, operate at lower security costs and refrain from paying

multistakeholder partnerships should encourage unions to participate more actively in such efforts, which may have the potential to alleviate the security problems faced by union leaders and members.

The Colombian experience shows that partnerships have derived primarily from the need of companies, local governments and communities to implement successful social and economic programmes that truly generate sustainable income and employment and therefore reduce illegal combatant influence. Some companies expressed that they encounter logistical and political difficulties when interacting outside their operation premises and often lack enough knowledge on the local micro-dynamics and needs. However, it seems that many have what local communities and public authorities lack - technical know-how. Conference participants stressed that private sector managers and technical experts have introduced important business and management expertise that has served to benefit development projects (i.e. the design and implementation of agricultural and manufacturing projects; accounting procedures). In addition to providing financial resources and leverage, companies may also contribute to resolving procurement problems and may have better relations with banking institutions. The private sector can thus help economic development and social programmes to produce concrete results beyond the dialogue process itself. This will ultimately increase the potential for programmes to be successful on their own terms and as conflict prevention measures. Therefore, partnerships should seek to balance out each stakeholders' strengths and weaknesses based on principles of common interests and complementarity.

An expert study presented at the conference also established that best results are achieved when partnership members agree on formal coordination committees where relations are non-hierarchical and information on all aspects of the projects is allowed to flow freely, and short-term and long-term objectives are well-defined and concrete. Equitable profit-sharing and co-ownership between grass-root associations and private sector actors are also recommended as ways to encourage sustainable economic conditions for local communities. These should not restrict their role to the simple provision of labour.

A) Promoting state legitimacy

Despite academic and political disagreements on the origins and nature of the Colombian conflict, most observers, national and foreign, have come to agree today that recovery will need strong, democratic and efficient law enforcement, security, judicial, administrative and political institutions both at the national and local levels. They also stress that private sector companies should be careful, given their increasingly proactive role in conflict prevention and peace-building, not to replace the state, foster public sector dependence on firms, outshine official leadership or focus exclusively on empowering civil society and NGOs. Yet company participants highlighted that they face a dilemma – how to maximize their positive impact within local communities without undertaking tasks traditionally assigned to states.

In order to help promote state legitimacy, many companies fund projects aiming to build public sector capacity and transparency norms; actively seek partnerships with local governors and mayors; and tie in social initiatives to official development plans. Additionally, several companies fund training programmes on democratic institutions for both local communities and public sector officials. When supporting security or justice activities some companies have chosen to provide logistical assistance in kind only and refrain from getting involved in authorities' daily operations. It was recommended that companies, national and foreign, should consider mainstreaming support for institution-building and the promotion of democratic values throughout their corporate social responsibility programmes.

B) Making multistakeholder initiatives successful

Partnerships between private sector actors, NGOs, governments and international institutions to carry out social welfare programmes and conflict prevention or peace-building initiatives are relatively recent. Experts and participants of the meeting expressed the view that the multistakeholder dialogue process in itself is a worthy trust-building mechanism and an important way to promote multiparty ownership. In an environment like Colombia's, where conflict and ideological polarization have widened the gap between companies on one side and NGOs and unions on the other, partnerships are useful exercises of peaceful coexistence that all societal actors should continue to pursue. In particular, companies and NGOs with greater experience in

Generally, larger companies are better positioned to develop sophisticated analytical tools and compliance procedures, and can fight extortion more easily. Smaller companies are not only more vulnerable but have fewer opportunities to design and implement longer-term strategies.

- Investing in social and economic development projects, large or small, within or beyond the area of influence of company operations. Activities could address child education, adult technical training, basic food supply, health and employment issues and, less frequently, building of local infrastructure. Projects are often developed in partnership with public sector institutions, local banks, international development and financial institutions and local and international NGOs. Several companies have demonstrated that promoting sustainable economic development can in turn, help to prevent illegal armed group expansion. This is best achieved if social programmes focus on improving technical skills; community organization; leadership and proposal writing to obtain government funds and international assistance.

Companies have also learned that they can best contribute to development projects by lending, sharing or teaching their management and financial knowledge or by using their influence and good will on national and international bodies to attract greater investment. Several companies also stressed the strategic importance of strengthening local governance and promoting democratic values.

- Promoting and taking part in national-level peace negotiations or mass mobilizations against violence, and in general, engaging in the spheres of “high” and international politics of peace.

Text box 1

- During the 1997 local elections, workers, students, businesses, NGOs, academics, peasants, media and native Colombians came together in an unprecedented mass mobilization to cast a symbolic peace ballot. 10 million Colombians voted for a “Peace, life and freedom mandate”. This was the beginning of a national consensus on the need to end war.
- In 1999-2001 leading company managers participated in the negotiation attempts with FARC and created a foundation to promote a negotiated solution to conflict and to provide technical assistance to the parties.

- I. The options for private sector contribution to conflict prevention and peace-building, including:
 - A) Promoting state legitimacy.
 - B) Making multistakeholder initiatives successful.
 - C) Constructive relations with local communities.
 - D) Transparency and anti-corruption measures.
 - E) Local financial institutions supporting local development.
 - F) Lessons learned from the implementation of the Voluntary Principles on Security and Human Rights.
- II. The pre-launch of the Global Compact Network in Colombia and key areas of focus.

1. The options for private sector contribution to conflict prevention and peace-building

Companies operating in conflict zones increasingly recognize the importance of engaging in conflict prevention and peace-building activities, but many do not know what to do. Several Colombian firms are already exploring creative ways to go beyond philanthropic undertakings to tackle specific challenges that help in the process of conflict transformation, such as changing the way in which they normally conduct business. Experiences shared by conference participants revealed there is a wide range of options with important potential, on their own or collectively, to have significant local and even national level impact. Constructive engagement by companies may involve:

- Adjusting day-to-day operations, including:
 - adopting conflict-sensitive employment policies
 - developing conflict impact and risk assessment tools
 - adopting human rights and ethics codes of conduct that induce changes to the corporate culture
 - implementing transparency policies regarding accounting procedures, contracts and, where applicable, revenue-sharing and management regimes
 - establishing pacts not to pay extortion money to illegal combatants or not to purchase kidnapping insurance for employees

Zones of Conflict". International-level meetings in 2001 and 2002 resulted in a range of policy recommendations and guidelines on critical issues concerning business practices in unstable environments and potential contributions by the private sector to conflict prevention and peace building. In order to receive feedback on these outcomes and to further explore key challenges faced by companies operating in zones of conflict, a series of regional-level workshops were organized, the last of which occurred in Colombia (Sub-Saharan Africa, November 2002; Central Asia, November 2003). Convened in Bogota on May 27-28 2004 and sponsored by the Government of Canada, this policy dialogue addressed the role of international and national companies in conflict prevention and peace-building with a focus exclusively on Colombia.

The meeting successfully achieved the following objectives:

- It brought together foreign and national private sector representatives, local labour unions, civil society groups, experts on business and conflict, government officials and UN representatives in a neutral forum that allowed a candid dialogue on the challenges posed by local conflict dynamics. Given the context of deep social and ideological polarization, exacerbated by war, this conference was a significant opportunity for trust-building.
- It raised the awareness of company managers on-the-ground regarding the options for, and limits of, private sector engagement in conflict prevention and peace-building.
- It encouraged company managers to go beyond their social investment and philanthropy programmes and to work towards changing their core business operations in order to better contribute to conflict prevention and peace building.
- It served to develop practical recommendations for domestic and international companies to engage constructively in conflict prevention efforts in Colombia.
- It provided an opportunity to pre-launch the local Global Compact network and begin the creation of a Steering Committee, which will promote Global Compact initiatives and bring together willing and capable actors in Colombia seeking to achieve sustainable peace.

This report synthesizes the main discussions along the following key themes:

The Role of the Private Sector in Conflict Prevention and Peace-building in Colombia: Lessons and Challenges

**Meeting report prepared by Alexandra
Guàqueta, D. Phil., Fundación Ideas para la Paz**

Introduction

Economic and political liberalization have turned the private sector into a key global player. For good or for ill, large multinational companies in the extractive sector, national manufacturers and service providers, as well as financial institutions never play a neutral role in societies—much less so in weak states with vulnerable political, economic and social structures and countries affected by violent conflict. Most decisions companies make regarding employment, outsourcing, procurement, health and safety procedures, asset and employee security, environmental protection, distribution lines or community engagement have an impact on local populations. In the context of war, these activities may help, directly or indirectly, to fuel violence or to positively transform conflict situations into sustainable peace.

The UN Global Compact is seeking to advance voluntary corporate citizenship so that business plays its part in contributing to a more sustainable and inclusive economy. Global Compact Policy Dialogues serve as a platform to promote mutual understanding and joint efforts among business, labour, civil society organizations, government, UN agencies and leading commentators from the academic and public policy communities in order to address contemporary globalization challenges. The first topic the Global Compact embarked upon through the organization of policy dialogues is “The Role of the Private Sector in

- Banks should develop special lines of products and services, such as micro-credits, that follow different procedures from standard loans. They should also provide customers in vulnerable zones with technical assistance in the areas of project planning and development and accounting.
- To continue strengthening the Voluntary Principles on Security and Human Rights signatories should:
 - emphasise human rights training for local company employees, especially former military
 - extend the code to local contractors and promote their safety
 - establish mechanisms to gain access to the human rights record of public security forces as well as monitoring mechanisms
 - promote dialogue with international and local NGOs and unions
- Voluntary Principles signatories and other stakeholders should examine ways to replicate the code to other industries facing security and human rights challenges.
- At least two key factors related to the dynamics of the armed conflict in Colombia seem to fall outside the scope of firms - one is reducing illegal drug demand and the other is shaping major global trade and investment rules.

work to enlist greater participation from Colombian companies and civil society and engage in activities aimed at scaling up the private sector's contribution to conflict prevention and peace building in Colombia.

2. Recommendations

- Companies should promote state legitimacy. They should prevent public sector dependence on private firms, refrain from outsourcing official leadership and fund projects that both empower civil society and strengthen local state capacity. Companies can mainstream democracy and institution-building throughout their corporate social responsibility programmes.
- The multistakeholder dialogue process is a worthy trust-building mechanism. Yet partnerships established to carry out economic development and social programmes that ultimately aim at preventing conflict should have concrete material results and thus be based on principles of common interests and complementarity. Companies can contribute to the success of programmes with their management and financial skills and their knowledge on local and international markets. Unions should be encouraged to participate more actively in multistakeholder partnerships, which may have the potential to reduce their security problems.
- Companies should engage communities in an ongoing consultation process and dialogue in order to demonstrate to them how they can derive sustainable benefits from a company's operations - such as a more secure environment. Companies should view communities as key allies in conflict prevention and peace building. The presence of military alone does not secure an operation as long as communities are not in support of the company.
- Participants pointed out that companies should expand their approach to transparency. An activity could include forging pacts not to lobby public sector officials for individual gains.
- Control and transparency measures adopted by banks should be more systematically applied by other actors, such as insurers, stock markets, chambers of commerce and state agencies that register and regulate industries, retailers and service providers.

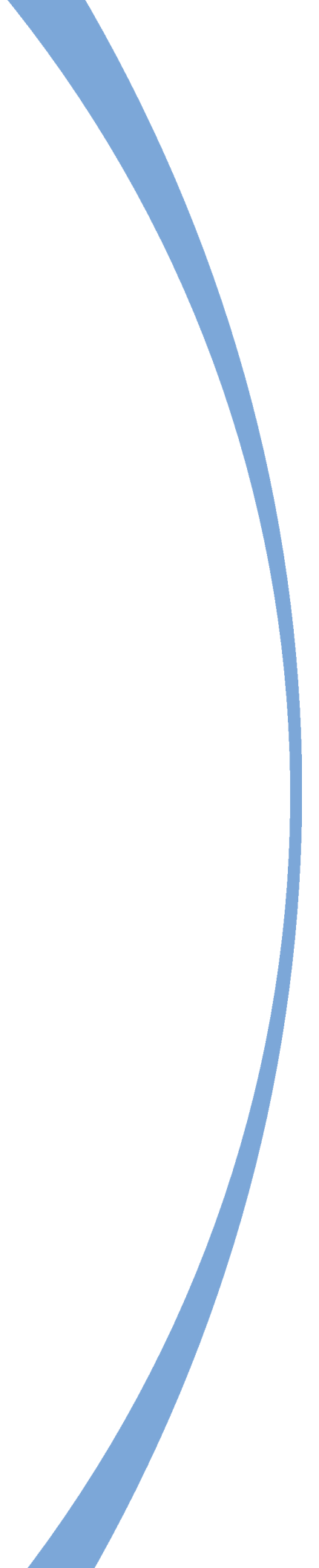
The UN Global Compact initiative has given special attention to the role of the private sector in conflict zones. The conference held in Bogotá on May 27th-28th, 2004, sponsored by the Government of Canada, was the third of a series of regional policy dialogues (Sub-Saharan Africa, November 2002; Central Asia, November 2003) addressing the role of private sector companies in conflict prevention and peace building in Colombia. It also served to pre-launch the local Global Compact network. The following are the key outcomes and recommendations of the meeting.

1. Outcomes

- The meeting brought together foreign and national private sector representatives, local labour unions, civil society groups, experts on business and conflict, government officials, and UN representatives in a neutral forum. Given the context of deep social and ideological polarization, exacerbated by war, this conference was a significant opportunity for trust building.
- It stressed the need for companies to go beyond social investment/philanthropy programmes and contribute to conflict prevention and peace building through their core business operations. Examples include, developing conflict-sensitive management practices, such as the use of conflict impact and risk assessment tools; the adoption of human rights and ethics codes of conduct; and the implementation of transparency policies.
- It raised awareness among participants regarding the need to further examine how smaller companies, which typically lack financial resources and leverage of large companies, can develop conflict-sensitive business practices and strategies (i.e. development of long-term security strategies).
- It led to the pre-launch of a Global Compact Network in Colombia and the establishment of a preliminary network structure that will

Table of contents

Executive summary	4
Introduction	7
1. The options for private sector contribution to conflict prevention and peace-building	9
A) Promoting state legitimacy	11
B) Making multistakeholder initiatives successful	11
C) Constructive relations with local communities	13
D) Transparency and anti-corruption measures	14
E) Local financial institutions supporting local development ..	16
F) Lessons learned from the implementation of the Voluntary Principles on Security and Human Rights	17
2. The Colombian Global Compact network	19
Conclusions	21



Global Compact Policy Dialogue

The Role of the Private Sector in Conflict Prevention and Peace-building in Colombia: Lessons and Challenges

Bogotá, May 27-28, 2004

Meeting report prepared by Alexandra Guáqueta, D. Phil.,
Fundación Ideas para la Paz





The Role of the Private Sector in Conflict Prevention and Peace-building in Colombia: Lessons and Challenges

